

Juan Pineda
Anita Krainer
coordinadores

Periferias de la periferia

Procesos territoriales indígenas en la Costa y la Amazonía ecuatoriana



Periferias de la periferia: procesos territoriales indígenas en la Costa y la Amazonía ecuatoriana /
coordinado por Juan Pineda y Anita Krainer. Quito : FLACSO, Sede Ecuador, 2012

251 p. : il., fotografías, gráficos, mapas y tablas

ISBN: 978-9978-67-376-8

INDÍGENAS ; GRUPOS ÉTNICOS ; ECUADOR ; TERRITORIALIDAD; TERRITORIO ;
IDENTIDAD ÉTNICA ; GOBERNANZA ; PARQUE NACIONAL YASUNÍ ; CONFLICTOS
SOCIOAMBIENTALES ; TURISMO COMUNITARIO.

306.08 - CDD

© De la presente edición:

FLACSO, Sede Ecuador
La Pradera E7-174 y Diego de Almagro
Quito-Ecuador
Telf.: (593-2) 323 8888
Fax: (593-2) 323 7960
www.flacso.org.ec

WCS - Programa Ecuador
Antonio Flores Jijón E-1796 y Sotomayor
Quito-Ecuador
Telfs: (593-2) 224 9763 / 226 7034
www.wcsecuador.org

ISBN: 978-9978-67-376-8

Colaboradoras: María Fernanda Mora, Martha Guerra

Laboratorio de Interculturalidad - FLACSO

Cuidado de la edición: Paulina Torres

Diseño de portada e interiores: Antonio Mena - FLACSO

Imprenta: Rispergraf C.A.

Quito, Ecuador, 2012

1ª. edición: diciembre de 2012

Índice

Presentación	7
Resumen general del libro	9
Los territorios indígenas de la Costa y Amazonía ecuatoriana. Las historias no narradas de la nación	11
<i>Juan Pineda Medina</i> <i>Anita Krainer</i>	
Parte 1 La consolidación e institucionalización del territorio	
El margen y el poder: (des)conexiones de la conservación en territorio awá	25
<i>Anne-Lise Naizot</i>	
Reflexiones en torno a la construcción de un sistema de gobernanza en el territorio awá ecuatoriano. Apuestas por una participación eficaz	65
<i>Juan Pineda Medina</i>	

Parte 2	
Territorio e identidad.	101
Dislocando los procesos de identificación. Tensiones entre apropiaciones locales y nacionales del patrimonio arqueológico de La Tolita Pampa de Oro	103
<i>Miguel Ángel Rivera Fellner</i>	
La identidad étnica, componente simbólico para la gobernanza territorial indígena	137
<i>Juan Carlos González Guzmán</i>	
Cowode. La imagen waorani del caníbal y la lucha por el territorio en el Yasuní	165
<i>Bardomiano Hernández</i>	
Parte 3	
Relaciones con el ‘mundo moderno’	
Mercado, instituciones y conflicto	193
Organizaciones sociales y conflictos socioambientales por la tala ilegal en el Parque Nacional Yasuní.	195
<i>Ivanova Monteros A.</i>	
Los retos del turismo comunitario en la Reserva de Biosfera Yasuní. El caso de la Red Solidaria de Turismo Comunitario de la Ribera del Napo.	221
<i>María Fernanda Mora</i>	
Información de los autores	249

Reflexiones en torno a la construcción de un sistema de gobernanza en el territorio awá ecuatoriano. Apuestas por una participación eficaz

Juan Pineda Medina*

Introducción

Cuando a inicios de la década de los años ochenta se empezó a hablar de la ‘aparición’ de una nueva nacionalidad indígena ecuatoriana, fueron solo algunos sectores gubernamentales, como la cancillería y ciertos gobiernos seccionales quienes tuvieron más apertura para un reconocimiento formal, sin embargo deberían pasar casi dos décadas para una formalización definitiva del territorio awá.

Resulta interesante notar que durante las décadas en que el movimiento indígena ecuatoriano se posicionaba en la esfera política y planteaba transformaciones importantes a la sociedad mediante movilizaciones y expresiones colectivas, el pueblo awá¹ permanecía poco visible y se enfocaba más hacia su fortalecimiento interno. Esta falta de visibilidad puede haber sido provocada endógenamente, ya que este pueblo indígena y la institución que los representa (la FCAE), prefirieron en un inicio permanecer al

* Estudiante doctoral en Estudios Andinos; Magister en Estudios Socioambientales FLACSO-Ecuador. jpineda@flacso.org.ec, pinejuan@gmail.com

1 El pueblo awá ecuatoriano cuenta con una población de 3 500 personas (censo de la población awá, año 2002). Ocupan un territorio de 115 000 hectáreas en la zona fronteriza con Colombia, vertiente pacífica de la sierra, ocupando terrenos en las provincias de Carchi (13 comunidades), Esmeraldas (seis comunidades) e Imbabura (dos comunidades). Del lado colombiano, el territorio awá abarca varios municipios del departamento de Nariño y el Putumayo y una población de más de 30 000 personas. Existen tres organizaciones: UNIPA, CAMAWARI y ACIPAP.

margen del proceso indígena ecuatoriano y especialmente de su dinámica política, manteniendo gran autonomía política y organizativa a pesar de pertenecer a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (CONAICE).

Por otro lado, hoy en día existen varios aspectos y dinámicas sociopolíticas que le dan al territorio y al proceso awá características particulares e interesantes y que acaparan la atención de académicos, políticos, ONG y también de empresas². La ubicación fronteriza, la abundancia de recursos, la diversidad biológica de sus ecosistemas, la situación conflictiva de la localidad son algunos de ellos. A esto se suma el desconocimiento y falta de información académica sobre los procesos sociopolíticos que ocurren en el territorio.

El proceso organizativo awá lleva más de 25 años, durante los cuales han habido fases importantes como la conformación y formalización de comunidades, la posterior construcción de la Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE) como entidad representativa, la delimitación territorial y la implementación de proyectos de conservación y desarrollo apoyados por varias agencias de cooperación entre las que sobresale la fundación Altrópico, la agencias de los Estados Unidos para la cooperación al desarrollo (USAID), la ONG Wildlife Conservation Society (WCS³) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).

La temprana conformación de una institución representativa –la FCAE– permitió el posicionamiento del pueblo awá ante el Estado y ante otros pueblos y organizaciones de la zona. La FCAE nació con el propósito de viabilizar el fortalecimiento del proceso organizativo, no obstante, la relación con sus bases comunitarias ha estado atravesada por la complejidad y las tensiones.

La relación de las comunidades con la FCAE y la relación de esta última con las agencias de cooperación, con el Gobierno y con las demás or-

2 El avance de la palmicultura en la provincia de Esmeraldas y la penetración de empresas madereras y mineras indican este interés creciente por parte del sector empresarial.

3 WCS-Ecuador es una agencia de conservación internacional que implementó durante 2007-2011 un proyecto en territorio awá denominado Gestión Integral de Territorios Indígenas (GITI), enfocado al fortalecimiento del proceso organizativo y a la planificación del uso de los recursos en territorio awá. Este proyecto fue financiado por USAID.

ganizaciones, son las dinámicas centrales del proceso de organización awá. El entramado de relaciones complejas, que tiene una naturaleza inminentemente política, configura el sistema de gobernanza en el territorio awá y es en torno a las cuales este documento se enfocará. Se hará una aproximación desde el marco de la gobernanza y, tomando a la participación como eje importante del análisis.

La configuración de un sistema de gobernanza que permita mantener una cohesión territorial, generando consensos en torno al uso sustentable de los recursos y generando dinámicas que propicien el desarrollo de las comunidades awá es, en un sentido general, el propósito del proceso organizativo awá. En este documento son abordados los retos que esta tarea ha implicado, y las fortalezas y debilidades de este proceso que lidera la FCAE.

La relación de la FCAE y las comunidades está al centro del análisis y es en torno a este ámbito que planteo algunas preguntas que considero interesantes. Al respecto busco indagar ¿Por qué los proyectos de conservación y planificación del uso de los recursos no han tenido el éxito esperado? y ¿Por qué aparecen dificultades en enfrentar y frenar los actuales conflictos territoriales?

Planteo que existen varios factores que confluyen para generar el panorama actual en el territorio awá. Por un lado, la ausencia crónica del Estado ha configurado una condición de periferia del territorio awá dentro de la nación ecuatoriana que coincide con una ubicación geográfica fronteriza, que en su conjunto tienen una serie de implicaciones adicionales en el sistema de gobernanza el cual se sitúa en “los confines de la gobernanza democrática” (Fontaine, 2011). Otro factor importante hace referencia a la relación particular que la FCAE y las comunidades han establecido con las agencias de cooperación, particularmente USAID. Finalmente, las dinámicas particulares de la participación comunitaria han presentado ciertas limitaciones en la incidencia y direccionamiento del proceso organizativo como tal, generando por un lado una deficiencia en el procesamiento de los conflictos y por otro, una orientación particular del proceso organizativo que no necesariamente resuelve las demandas y exigencias de las comunidades.

El presente artículo hace un recuento y análisis del proceso de consolidación de un sistema de gobernanza en el territorio awá. El documento cuenta con cuatro partes principales. En la primera parte se plantean las bases conceptuales y definiciones teóricas de la gobernanza, los modos de gobernanza, y la participación. Posteriormente se hace un recuento del proceso organizativo identificando las principales etapas. Seguidamente se analizan relaciones fundamentales del sistema, especialmente la relación de las comunidades con la FCAE y de la FCAE con las agencias de cooperación al desarrollo y conservación. Para este análisis se toma como eje las diferentes dimensiones de la participación, discutiendo sus fortalezas y limitaciones y el efecto de estas en aspectos clave como la legitimidad, la justicia y la eficiencia de las acciones y decisiones de la FCAE. El análisis de los órdenes de gobernanza permitirá detallar más los efectos de la ubicación periférica dentro de la nación ecuatoriana, y será esta una dimensión explicativa de muchos de las falencias en el sistema de gobernanza. Se vinculan también con la actual situación conflictiva del territorio y se identifican también las fortalezas y nuevos rumbos del proceso. Finalmente se discuten los cambios que están siendo incorporados en el proceso organizativo y en el enfoque de la FCAE, y se aprovecha para hacer algunas recomendaciones puntuales.

Gobernabilidad y gobernanza. Las múltiples caras de un concepto

La situación mundial en la década de los años setenta acarreada por la decisión de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) de incrementar el precio del crudo, generó una preocupación principalmente en los países industrializados (Estados Unidos, países de Europa Central, y Japón), sobre la estabilidad de la democracia. En 1975, la Comisión Trilateral⁴, publica un informe sobre la “crisis de la democracia” (Crozier *et al.*, 1975), planteando que la posibilidad de gobernar la democracia estaba

⁴ Creada en 1973 para promover el diálogo del sector privado entre Estados Unidos, Europa y Asia abordando principalmente temas de alcance mundial como las crisis económicas, las fluctuaciones del precio del petróleo etc. <http://www.trilateral.org/>

cada vez más condicionada. El concepto de *governability* desarrollado en el informe de la Comisión, si bien es configurado como una herramienta que permite evaluar estas posibilidades de gobernar (no solamente la democracia, sino también las sociedades, e incluso las instituciones y los procesos) y las crisis que el proceso de gobernar pudiera tener, tuvo también planteamientos de fondo que reflejaban una postura conservadora frente al tema. Esto se hizo particularmente evidente en la consideración de que la proliferación de demandas sociales es la causa principal de la ingobernabilidad y la restricción de dichas demandas sería la mejor vía para la gobernabilidad.

En América Latina, el debate sobre la gobernabilidad tuvo un proceso de adecuación que provocó una multiplicación de los significados de *governability* (Coppedge, 2001). Las reflexiones en la región estuvieron marcadas por procesos como las transiciones a la democracia, así como también la consolidación de las interacciones entre Estado-economía. Las disputas entre ordenes neoliberales y progresistas y las maneras particulares en que los gobiernos procesaron las crisis económicas y las consecuencias de las medidas de ajuste estructural también brindaron elementos importantes para el debate.

Flisfisch (1989), en una reflexión en torno a las transiciones democráticas, definió la gobernabilidad en términos de la configuración de un orden que permitiera estabilidad, pero que no se quedara únicamente en el funcionamiento de las reglas democráticas, sino que analizara también el juego político concreto que está definido por las interacciones entre los actores. Este orden hace referencia a la creación de un conjunto de reglas que regulen las interacciones entre los actores del sistema social y político, a la vez que definen lo que sería permitido y prohibido con el fin de reducir la incertidumbre.

Las consecuencias de modelos neoliberales implementados en la región, generaron reflexiones importantes que desembocaron en nuevas aristas del concepto de gobernabilidad. Las relaciones particulares entre Estado y economía bajo dichos modelos permitieron una proliferación de conflictos sociales, que un Estado reducido sustancialmente no tenía ni las capacidades ni el interés por resolver. Las crisis de legitimidad de los regímenes políticos que habían amparado modelos neoliberales, dificultaban la aplicación de

políticas, y generaban inestabilidad. En este sentido, las propuestas de Ansaldi (1991) para fortalecer la gobernabilidad se enfocaban en repotenciar el Estado, a la vez que se profundizaba en una descentralización que permitiera la participación local. En el sentido macroeconómico, la gobernabilidad pasaba también por un tipo de relación comercial entre países que no deteriorara progresivamente los términos del intercambio comercial a favor de los países del centro industrial-capitalista (Ansaldi, 1991).

El término *gobernanza*, fue tomado como una traducción⁵ del concepto de *governance* difundido principalmente por el “Libro blanco de la gobernanza” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001). La gobernanza fue inicialmente entendida como “[las] condiciones financieras, sociales y administrativas necesarias para instrumentar y aplicar las decisiones políticas adoptadas y poder ejercer la autoridad” (Sosa, 2000).

El concepto de *governance* fue rápidamente incorporado por el sector de la cooperación al desarrollo, imprimiéndole un sentido específico –*good governance*–; particularmente, esta acepción del concepto tuvo una gran difusión (Fontaine, 2004). Instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hicieron del concepto de *buena gobernanza* una herramienta más con propósitos prescriptivos que analíticos, y transformaron lo que fuera un concepto de la ciencia política, en una ‘lista de criterios’ de lo que se consideraba ‘deseable’ en materia de dinámicas de gobierno para poder ser sujetos de crédito (cf. Kauffmann et al., 2006).

La noción de buena gobernanza tiene diferencias importantes con el concepto de gobernanza, principalmente frente a su capacidad analítica. Mientras que gobernabilidad y gobernanza son conceptos que permite analizar la relación entre la sociedad y el Gobierno en términos de equilibrios entre demandas y respuestas, la ‘buena gobernanza’ parte del supuesto que existen parámetros de gobierno ideales *per sé*, los cuales deben cumplirse para lograr gobernar una sociedad. Particularmente estos criterios

5 La traducción del término ha implicado complejidades terminológicas que fueron analizadas por Solá (2000) en el boletín de las unidades españolas de traducción de la comisión europea (Ver <http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/65/pyc652.htm>).

asociados al concepto de buena gobernanza han sido promovidos desde posturas neoliberales.

El avance en la teorización sobre los conceptos de gobernabilidad y gobernanza ha llevado el análisis más allá de meras diferencias semánticas y regionales, y le han dado un contenido analítico importante. Por su parte, la gobernabilidad es entendida como el *proceso* político, que puede implicar, por ejemplo, la construcción de instituciones y normas; la gobernanza en cambio es entendida como el *sistema* en el que se desarrolla la gobernabilidad (Fontaine y Velasco, 2011). Este sistema, conformado por las instituciones y reglas en sí puede tener arquitecturas diversas, que le imprimen características particulares al sistema y al funcionamiento dentro de éste. La relación entre gobernabilidad y gobernanza es mutuamente condicionante.

El análisis de la gobernanza

Un aspecto conceptual fundamental para el análisis de la gobernanza, fue planteado desde el texto clásico de la Comisión Trilateral (Crozier *et al.*, 1975) y más allá de su orientación política, hace aportes que están en el corazón de las potencialidades analíticas; dicho aspecto hace referencia al carácter relacional del proceso de gobierno, específicamente a las relaciones entre el Gobierno y la sociedad en general. En el 2001, Antonio Camou retoma este aspecto y plantea la gobernabilidad como “un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de demandas societales y la capacidad del sistema político (Estado/Gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz” (Camou, 2001: 36). Las dimensiones de la legitimidad y la eficacia son también consideradas por Fung (2006) que propone un marco para el análisis de la participación en términos de la legitimidad, la efectividad y la justicia en la interacción entre el Gobierno y la sociedad.

Durante mucho tiempo, el debate sobre gobernanza y gobernabilidad estuvo atravesado por una serie de confusiones que incluían dimensiones semánticas e incluso de la traducción del concepto del inglés al español. Si bien para Camou, las diferencias entre gobernanza y gobernabilidad obedecen principalmente a tradiciones académicas, y no tanto a razones de

fondo (cf. Camou, 2001). Kooiman (2004) plantea una distinción importante que es considerada en esta investigación. Para este autor, la gobernabilidad hace referencia a los procesos políticos, mientras que la gobernanza hace referencia al sistema.

El elemento de *proceso* se refiere al aspecto de acción de las interacciones. Los procesos son el resultado de la capacidad de actuar de los actores sociales [...] Los valores, objetivos, intereses y propósitos concretos (individuales, pero también organizacionales o de grupo) se expresan en acción y también necesitan estar incluidos en el nivel de acción de las interacciones. El aspecto *estructural* [el sistema] de las interacciones muestra los marcos y contextos material, socio-estructural y cultural en los que las interacciones suceden. El nivel estructural puede ser considerado como el conjunto de circunstancias que están limitando, ampliando y al mismo tiempo condicionando el nivel de acción. Se compone de instituciones, estructuras sociales generales, reglas y normas de conducta, esquemas de comunicación, posibilidades materiales y tecnológicas y limitaciones con capacidad para condicionar. Con la ayuda de los elementos de estructura y proceso, una interacción se puede descomponer en elementos constitutivos, que puedan ser conceptualizados como objetos de gobierno” (Kooiman, 2004: 176).

Esta propuesta conceptual, contempla implícitamente, que una comprensión integral de un fenómeno sociopolítico debe abarcar tanto los procesos como los sistemas o estructuras en los cuales ocurren dichos procesos. Por tanto, la gobernabilidad y la gobernanza son consideradas en esta investigación sobre el proceso organizativo acá. Respecto a la gobernabilidad se analizan las principales instituciones como la FCAE y las asambleas principalmente (su estructura, y su funcionamiento). Por su parte, uno de los procesos más importantes que se analizan en la presente investigación es el participativo. La participación ha sido uno de los conceptos que ha gozado de popularidad en las últimas décadas, especialmente con la aparición de gobiernos de izquierda en América Latina y los intentos de transformar la democracia liberal delegativa. No obstante, no es usual un análisis sistemático de los procesos de participación, y las herramientas conceptuales desarrolladas para ello no han gozado de mucha difusión.

Una propuesta detallada de análisis del proceso participativo ha sido desarrollada por Archon Fung (2006), donde plantea que la relación entre el Gobierno y la sociedad, expresada principalmente en el proceso de participación consta de tres ejes fundamentales. El primero de estos ejes hace referencia a qué sectores, o qué tipo de personas están habilitados para participar; el segundo eje hace referencia a los tipos de comunicación que se generan en los espacios participativos; y el tercer eje hace referencia al impacto que tienen las participaciones en las decisiones gubernamentales y en la política pública (ver Gráfico 1).

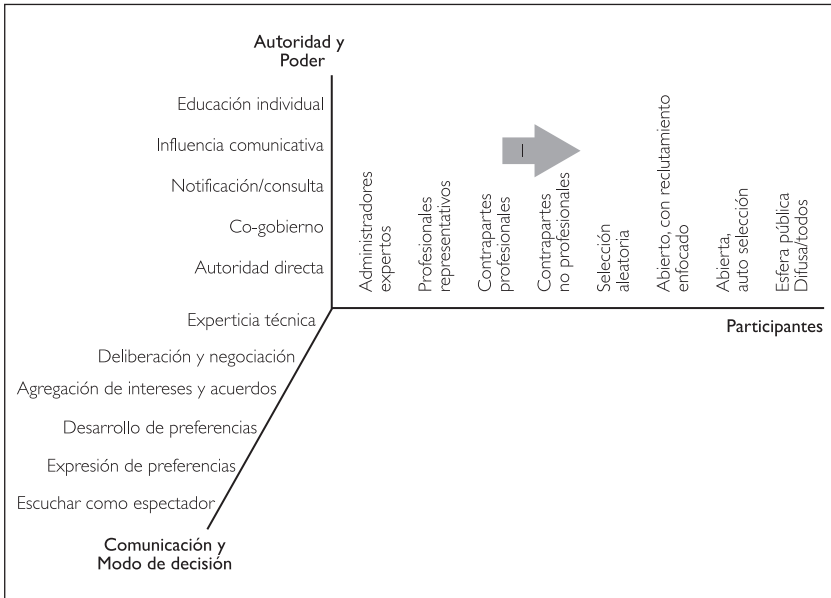
Primero, en referencia a quienes participan. Algunos procesos participativos son abiertos a todo aquel que se quiera involucrar, mientras otros invitan solo a elites interesadas [...]. La segunda dimensión determina cómo los participantes intercambian información y toman decisiones. En muchas reuniones⁶ públicas, los participantes sólo reciben información de los oficiales⁷ quienes anuncian y explican las políticas. Un mucho menor número de casos son deliberativos en el sentido de que los ciudadanos tomen posiciones, intercambien razones y algunas veces cambien sus opiniones en el curso de la discusión. La tercera dimensión describe el vínculo entre las discusiones y las políticas o la acción pública. Estas tres dimensiones –alcance de la participación, modo de comunicación y decisión y extensión de la autoridad– constituyen un espacio en el cual cualquier mecanismo de decisión pública puede ser ubicado” (Fung, 2006: 66).

El análisis de estos ejes permite respectivamente evaluar tres dimensiones fundamentales de la relación gobernantes-gobernados: legitimidad, justicia y eficiencia (Fung, 2006).

6 Podría entenderse también *audiencias públicas*, o *debates públicos*.

7 Por “oficiales” se hace referencia a algún funcionario público.

Gráfico N.º 1
La participación, un proceso tridimensional



Fuente: Fung (2006: 72).

La gobernanza interactiva

Las teorías sistémicas en las ciencias sociales han desarrollado conceptualizaciones muy sólidas que permiten evaluar otras dimensiones relevantes de las interacciones en los sistemas de gobernanza. Para Kooiman (2004), la gobernanza es un proceso inminentemente interactivo, y estas interacciones ocurren en diversos niveles y su análisis implica abordar dimensiones diversas. Una dimensión importante que Kooiman conceptualiza hace referencia a la ‘arquitectura’ en la distribución del poder y al tipo de relaciones que de dicha distribución se generen; los modos de gobernanza identificados por Kooiman son cuatro: la auto gobernanza hace referencia a un sistema social donde el poder está en el sistema social y no en el sistema

de gobierno, y los ciudadanos se gobiernan a sí mismos; la co-gobernanza, donde el poder está repartido entre el Gobierno y los ciudadanos; la gobernanza jerárquica donde el poder está concentrado en el Gobierno; y la gobernanza mixta, donde en un sistema se mezclan dos o más de los modos mencionados (Kooiman, 2004).

Los órdenes de la gobernanza⁸ es una dimensión compleja de los niveles en los que ocurren las interacciones. Kooiman plantea tres órdenes:

El primer orden de gobierno persigue solventar problemas [y crear oportunidades] directamente a un nivel particular. El segundo nivel de gobierno trata de influir en las condiciones bajo las que el primer orden de solución de problemas o creación de oportunidades ocurren; el segundo orden de gobierno se aplica a las condiciones estructurales del primer orden de gobierno. A estos dos órdenes se añade un tercer orden: *meta*⁹. Básicamente, 'meta' pregunta ¿quién o qué —en última instancia, gobierna a los gobernantes? En sí, ésta es una cuestión sencilla, pero en la práctica la respuesta a esta pregunta está lejos de ser sencilla (Kooiman, 2004: 185).

La aplicación de estos conceptos en el análisis del sistema de gobernanza en el territorio awá, implica detallar la dinámica de participación, en términos de Fung (2006); así como también la eficacia de la FCAE en la implementación de las decisiones e incluso de los proyectos. Se comentará también sobre el proceso de resolución de conflictos y la creación de oportunidades en las comunidades (el segundo orden de la gobernanza)¹⁰. La construcción de las instituciones y normativas es también un aspecto importante que ha sido considerado en este análisis y en el caso del pueblo Awá tiene una historia particular.

8 Kooiman plantea la existencia de diferentes niveles de agregación en las interacciones, y a su vez existen diferentes niveles de gobierno de las interacciones acción-estructura. El enlace de éstos, con los diferentes niveles de análisis, permite distinguir los diferentes órdenes de la gobernanza (Kooiman, 2004: 185).

9 El énfasis es del autor.

10 No se analizará esta vez la meta-gobernanza en el territorio awá (el tercer orden de la gobernanza).

Metodología

La realización de la presente investigación contó con la aplicación de una serie de herramientas metodológicas de diversa índole, que se complementaron entre sí de muy buena manera. En un primer momento, se realizó una revisión de literatura temática, que me permitió tener una aproximación general a la temática de los awá del Ecuador. Esta revisión permitió detectar las tendencias en los abordajes de los pocos documentos académicos sobre el tema, que se habían inclinado por priorizar aspectos de la cultura awá, especialmente en relación con el manejo de la selva.

Una segunda revisión de literatura, se enfocó en reconstruir el proceso organizativo awá, para lo cual se indagaron varios documentos técnicos de los proyectos ejecutados durante todo el proceso organizativo. Muchos de estos proyectos tuvieron como propósito específico fortalecer la organización institucional en el territorio awá, por tanto estos informes permitieron dar cuenta con detalle de las principales etapas de la historia organizativa awá. También se realizaron entrevistas semi estructuradas a los que fueron directores de los proyectos, o líderes comunitarios que estuvieron cerca en el proceso organizativo.

Para el análisis de los conflictos se utilizaron varias herramientas metodológicas. Se realizaron visitas a las comunidades donde se participó de reuniones comunitarias, y se registró en una bitácora de campo y en grabadora digital varias de las actividades realizadas. En estas reuniones se realizaron grupos focales con los líderes organizativos que brindaron información sobre las posturas ‘oficiales’ de la comunidad respecto a los conflictos en cuestión. La información generada en estos grupos focales fue complementada con entrevistas a profundidad con los líderes comunitarios principalmente vinculados al conflicto. Las entrevistas fueron grabadas y luego transcritas.

Para el caso del conflicto en la comunidad de Guadualito, se realizó un taller de cartografía social que indagó la situación actual de la comunidad, y la percepción sobre el conflicto que había transcurrido una década antes. Este taller generó información valiosa respecto a las percepciones comunitarias, y frente a otras fuentes de información. Se realizaron también

entrevistas a funcionarios de ONG que acompañaron el proceso de litigio de este conflicto.

El levantamiento de información sobre los espacios participativos y sus dinámicas internas, se realizó mediante la asistencia a varios de dichos espacios. La configuración del Consejo de Gobierno Ampliado¹¹ durante la fase de campo de esta investigación, permitió conocer con detalle la dinámica participativa del pueblo awá. Adicionalmente, se participó en una de las dos asambleas que se realizan anualmente, donde se reúnen líderes y habitantes de todas las comunidades del territorio. Durante los tres días de la asamblea se hizo un registro detallado del proceso participativo, describiendo y consignando y en la bitácora de campo información de primera mano, y reflexiones personales en torno al desenvolvimiento de la asamblea. Adicionalmente, se realizaron entrevistas a los directivos de la FCAE sobre sus percepciones de los procesos participativos.

El trabajo de campo se realizó durante siete meses, en los cuales se visitaron seis comunidades awá, y se participó del funcionamiento cotidiano de la FCAE, ubicada en Ibarra, y donde convergían permanentemente líderes de diversas comunidades que aportaron también con entrevistas e información valiosa.

Durante esta fase de campo realizamos una investigación para la FCAE sobre las amenazas sociales de la palmicultura, la minería y la tala ilegal de maderas en territorio awá que nos permitió acceder con facilidad a las comunidades, y los actores clave y a información cualificada tanto de las comunidades, como de la FCAE (cf. Naizot y Pineda, 2011).

La historia y el contexto del proceso awá

El proceso organizativo awá tiene sus inicios en la primera mitad de la década de los años ochenta, cuando apoyados por Jaime Levy¹², las comunidades del

11 Este espacio participativo reúne mensualmente a los presidentes de las comunidades con las directivas de la FCAE y con algunos miembros de las ONG de cooperación para tratar asuntos del proceso organizativo.

12 Jaime Levy pertenecía en ese entonces al cuerpo de paz. Se había establecido en la comunidad La

nororiente del territorio awá (comunidades de San Marcos, Ishpi, la Guaña, ver Mapa 1), empiezan a organizarse en cabildos para luego configurar la Federación de Centros Awá del Carchi, a *posteriori* la FCAE. La FCAE nace como la instancia de representación política del pueblo awá encargada de la defensa territorial y la generación de consensos en la administración, conservación y uso sustentable de los recursos, del apoyo al desarrollo del pueblo Awá y del mantenimiento y fortalecimiento de la cultura propia.

Desde el inicio, la FCAE ha mantenido canales de comunicación con sus bases. La *asamblea* como el principal de estos canales se realiza cada seis meses en diferentes lugares del territorio. La asamblea como espacio de carácter inminentemente político es donde la FCAE rinde cuentas a las comunidades y se hace un proceso de consulta de las bases para el direccionamiento de las acciones, especialmente de los proyectos.

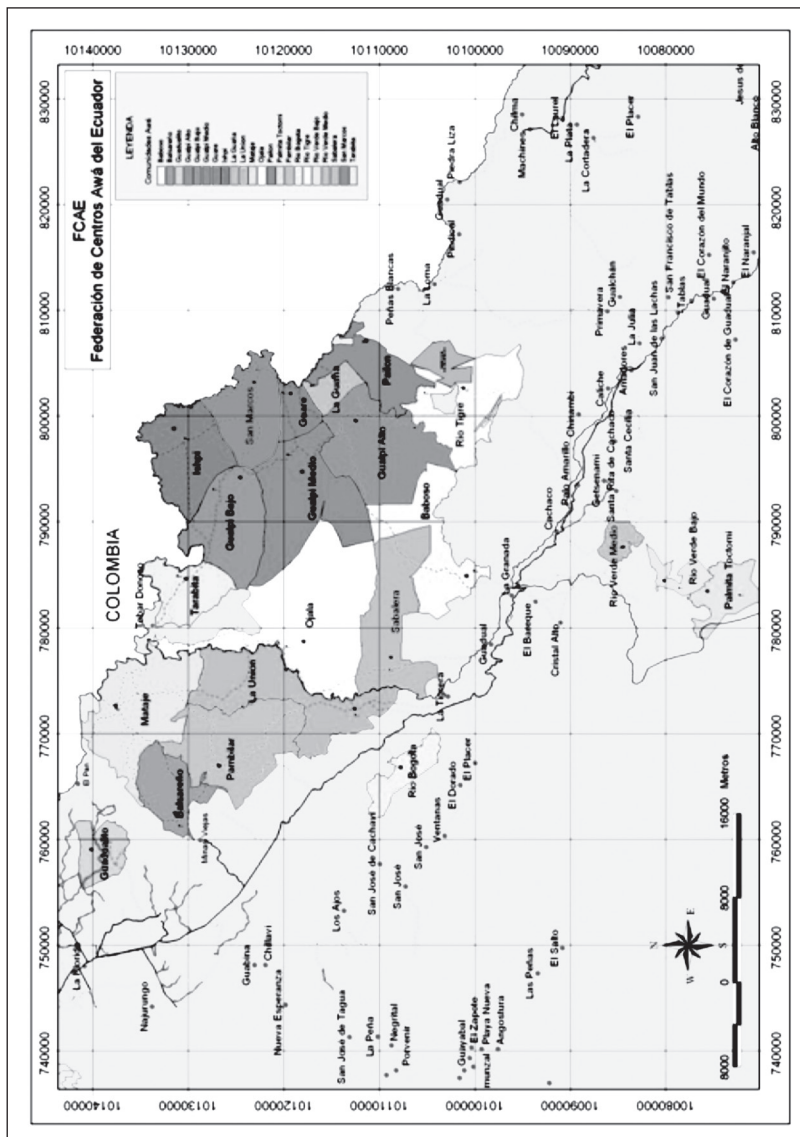
Durante el proceso de organización, un elemento fundamental fue la construcción de la manga (camino trazados en medio del bosque para delimitar el territorio awá), la cual representaba la posesión legítima en la zona y garantizaba un reconocimiento en terreno ante campesinos, las otras etnias y ante el Estado. La construcción de la mangas fue un proceso que duró tres años y despertó la solidaridad de todas las comunidades e incluso de las comunidades awá colombianas¹³. El punto central de esta etapa radicaba en el proceso de negociación de los límites territoriales con los campesinos y las otras etnias, proceso en el que se contó con el apoyo de la Cancillería ecuatoriana a través del programa *fronteras vivas*.

El impacto de la delimitación física del territorio awá fue doble. Hacia fuera, representó el reconocimiento ante los diferentes actores, y hacia adentro representó un proceso de empoderamiento, apropiación territorial y cohesión organizativa. La solidaridad comunitaria se manifestaba plenamente en esta actividad donde participaban hombres, mujeres y niños y a nivel organizativo, existía consenso en que era fundamental, ante las amenazas de invasión, la delimitación física y legal del territorio.

Esperanza, ubicada en el cordón fronterizo a pocos minutos de Chical (cantón Tulcán, provincia del Carchi). Jaime Levy fue un impulsor fundamental del proceso organizativo awá y ha acompañado desde entonces el proceso. Actualmente es director de la Fundación Altrópico desde donde sigue apoyando ya de forma menos directa al proceso awá (Entrevista Jaime Levy).

13 Entrevista a Jaime Levy.

Mapa N.º 1
Mapa de las comunidades awá



Fuente: Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE).

El reconocimiento legal del territorio ha pasado por varias etapas¹⁴, las cuales incluyen también el decreto por parte del Ministerio del Ambiente (MAE) en el año 2007 que estipulaba un co-manejo territorial entre comunidades afro y awá en la provincia de Esmeraldas. Esta decisión no consultada por parte del MAE desembocó en una marcha en junio de 2007 hasta Quito de aproximadamente 2 000 indígenas awá quienes lograron la prescripción del decreto¹⁵.

Hacia la década de los años noventa, la gestión de Jaime Levy influye en la creación de la UTEPA¹⁶, de la cual sería director durante los primeros años y a través de la cual se implementarían los primeros proyectos de conservación y desarrollo en el territorio awá. Posteriormente, cuando se hace evidente la necesidad de que la FCAE tenga una dinámica más autónoma, la adquisición de una oficina y la viabilización de la FCAE como ente ejecutor de proyectos dio otro “matiz” al proceso organizativo. Esta nueva etapa¹⁷, de “planificación” tomaba forma mediante la implementación de proyectos financiados y apoyados por donantes y agencias de conservación y desarrollo, principalmente USAID.

La priorización de cuatro ‘ejes’ de acción de la FCAE fue un punto que marcó una pauta importante para los futuros años de la FCAE, dichos ejes

14 La adjudicación del territorio awá se inició en 1988. En un primer momento, el Ministerio de Agricultura y Ganadería da un reconocimiento formal del territorio ancestral como Reserva Étnica-Forestal Awá Kwaiker. En 1995 se lleva a cabo otro proceso de linderación a cargo del INEFAN del mismo territorio. Fue solamente hasta el 2006 cuando el Ministerio del Ambiente (MAE) adjudicó oficialmente a la Federación de Centros Awá del Ecuador 99 336,51 hectáreas de territorio. Este territorio se ubica entre las siguientes parroquias: Tululbi y Mataje en el cantón de San Lorenzo, Esmeraldas; parroquias de Tobar Donoso, Chical y Jijón y Caamaño de los cantones Tulcán y Mira, Carchí (Ver información en Registro Oficial del Tribunal Constitucional del Ecuador. <http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/R.O.Marzo.1.2006.htm#anchor313339>).

15 http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=80169&anio=2007&mes=7&dia=11

16 La UTEPA fue una oficina de la Cancillería ecuatoriana creada el 4 de abril de 1994 (Reg. Oficial No. 412, Art. 0073). La UTEPA tuvo entre sus principales funciones “la coordinación y ejecución de los programas y proyectos relativos a la conservación y el desarrollo de las áreas fronterizas de la Amazonía y de la región awá” (Reg. Oficial No. 412, del 4 de abril de 1994).

17 Esta nueva etapa estuvo precedida de la conformación de la EPA (“Equipo de Planificación Awá”), la cual, como indica Jaime Levy, realizó un trabajo de ‘diagnóstico’ participativo del cual los cuatro ejes serían el resultado.

fueron: 1) Establecer la Reserva de La Vida, un área de aproximadamente 17 000 hectáreas de bosque primario, deshabitado, en el centro del territorio, como una especie de reserva de fauna y flora propia de la FCAE; 2) Establecer un Centro de Investigación Científica dentro del territorio, con fines de investigación, capacitación y ecoturismo; 3) Conformar un equipo propio de Manejo de Fauna, con el fin de entrar en este proceso con las comunidades del territorio; 4) Desarrollar un proyecto de manejo forestal comunitario, enfocado en proveer recursos a las comunidades a través de un manejo y extracción sostenible del recurso forestal (Cuasaluzán y Levy s/f).

Como se puede apreciar, esta etapa estuvo marcada por un interés en la conservación del territorio y en el uso sustentable de los recursos (especialmente forestales) y fue también una etapa donde el apoyo de WWF y USAID fue sustancial dando fuerza a la dinámica de implementación de proyectos como modo de administración del territorio. Detrás de estos intereses de conservación y de administración ambiental del territorio existe un fuerte componente de planificación del uso de los recursos naturales. Esta dimensión de planificación y administración del uso de los recursos es un tema político de gran calado que tiene influencia en los modos de vida de las personas.

Durante el periodo que se inició con la priorización de estos cuatro ejes sobresalió el proyecto SUBIR¹⁸ el cual estaba enfocado al aprovechamiento sustentable de los recursos que hicieran sinergia con procesos de conservación. Este proyecto también apoyó procesos de delimitación de tierras y consolidación territorial.

Posteriormente, el proyecto CAIMAN, con una duración aproximada de seis años, fue uno de los más importantes en territorio awá, y se enfocaba en apoyar procesos sustentables del uso de los recursos para viabilizar la conservación¹⁹ (USAID, 2006). Evidentemente la planificación del uso del territorio mediante diferentes herramientas (planes de vida, planes de manejo, planes de acción etc.) era un objetivo central. El proyecto CAIMAN fue “la sombrilla” de múltiples actividades que giraban en torno a los objetivos

18 Financiado por USAID.

19 Este proyecto también representó un apoyo importante en el proceso de consolidación territorial.

principales del proyecto. Durante este proyecto, la creación de una “reserva de la vida” fue una tarea importante. El proyecto CAIMAN, así como los anteriores y los subsiguientes, representan la fuente de financiación de la FCAE incluyendo a la dirigencia, el equipo técnico y el funcionamiento de la institución.

Varios hechos particulares acompañaron esta etapa. El primero de ellos fue la reelección durante tres mandatos consecutivos (nueve años) de Florencio Cantincuz como presidente de la FCAE. Otro hecho particular fue el conflicto entre la FCAE y la comunidad de Guadualito (ver Mapa 1) por la penetración de empresas madereras al territorio de la comunidad. Las empresas madereras se valieron de engaños y chantajes para construir una carretera y acceder a la madera del territorio de Guadualito. La FCAE opuso resistencia a esta extracción, pero no pudo detenerla y las relaciones con la comunidad se rompieron. No obstante, en un punto del conflicto, la FCAE exige a Guadualito tomar una determinación de separación de la FCAE si su propósito es la extracción, pero Guadualito elige permanecer. El proceso fue complejo y se generaron dinámicas de mutuos chantajes entre comunidades y empresas, y compromisos no cumplidos con la FCAE, finalmente la madera fue extraída²⁰ (cf. Lhem, 1994). Por otro lado, hacia 1995 las empresas palmicultoras empezaron un agresivo proceso de expansión de cultivos rodeando y contaminando las aguas de Guadualito y afectando sustancialmente la vida comunitaria. Guadualito ha iniciado procesos legales que no han logrado frenar el impacto y que han contado con la condescendencia hacia las empresas por parte del MAE y la justicia ecuatoriana como lo indican los líderes de Guadualito y la Corporación ECOLEX²¹.

Otro aspecto importante que debe ser resaltado es el propósito adicional de fortalecer a la FCAE que acompañó esta etapa de implementación de proyectos. Este fortalecimiento estuvo principalmente enfocado a crear las capacidades técnicas para que la FCAE tuviese las herramientas necesarias para la planificación del uso y conservación de los recursos. Ante esto,

20 Entrevista a Efrén Álvarez.

21 Entrevista a Silvana Rivadeneira.

la “transferencia de conocimientos” en materia forestal y en materia de sistemas de información geográfica fue sustancial²².

Por otro lado, la consolidación de la reserva de la vida, que implicó la inversión en cartografía, sistemas de información geográfica e inventarios biológicos, finalmente no fue aceptada por la asamblea; las comunidades con terrenos involucrados en la reserva reclamaron la rearticulación de estos a cada una de las comunidades. No obstante, la reserva de la vida, a pesar de ser inexistente, fue representada permanentemente en letreros y documentos. La situación con los planes de manejo y planificación de recursos fue similar.

Contrastando con esto, las comunidades vienen reclamando desde hace mucho tiempo mejorar las condiciones de salud, de educación y de movilidad en el territorio. Los esfuerzos del proceso organizativo, que incluyen la consolidación de la División Educativa Intercultural Bilingüe Awá (DEIBNAE), no alcanzan a transformar la situación de los awá quienes mantienen sus reclamos.

Otro proyecto que definió el accionar de la FCAE durante esta etapa fue el manejo forestal en un marco de usos sustentables del recurso. Al respecto, y ante la inminente explotación maderera, la FCAE promovió en el marco de la iniciativa CAIMAN, la consolidación de un proceso regulado y sostenible de aprovechamiento forestal en la comunidad de Mataje. Este proyecto estuvo enfocado en hacer una extracción sustentable y un cierto nivel de transformación de la madera, para la comercialización a través de la FCAE, con empresas madereras²³. Este proyecto buscaba dos resultados importantes. Eliminar los intermediarios de las empresas madereras que además de actuar bajo criterios netamente crematísticos, aplicaban estrategias de bajos precios y se quedaban con la mayor ganancia, y también lograr dar más valor agregado a la madera para una mayor ganancia de las comunidades. Hubo varios aspectos que obstaculizaron el proyecto. Por un lado, la sustentabilidad ambiental de la actividad ha sido cuestionada²⁴;

22 Entrevista Christian Rodas, Fundación Altrópico.

23 El tema de la certificación forestal siempre estuvo presente. No obstante, ante los estándares exigentes, esta apuesta sirvió más para el mejoramiento y el empoderamiento por parte de las comunidades aunque no se haya logrado la certificación como tal (Entrevista Jaime Levy).

24 Entrevista a Galo Zapata, Conversación con Esteban Suárez-WCS.

por otro lado, los acuerdos sobre las zonas de extracción no fueron cabalmente cumplidos por las comunidades. Finalmente, la FCAE actuando como intermediaria, debía asumir la diferencia económica que resultaba de comprar a las comunidades toda la madera como si fuera de primera calidad, pero venderla a la empresa bajo clasificaciones que consideraban que proporciones importantes de madera eran de segunda o tercera categoría (Entrevista E2, 2009)²⁵. Esta situación se hizo insostenible.

El final del mandato de Florencio y la llegada de Olindo Nastacuáz a la presidencia de la FCAE estuvo acompañado de una destitución del equipo técnico que acompañó a la FCAE durante los años anteriores. Esta ‘pérdida’ de capacidad técnica fue señalada por las agencias de cooperación como uno de los problemas graves de la FCAE²⁶.

En los últimos dos años (2007-2009), WCS ha implementado el proyecto *Gestión Integrada de Territorios Indígenas* el cual es apoyado financieramente desde USAID. Este proyecto ha tenido como objetivos el fortalecimiento institucional y asesoría técnica de la FCAE, apoyo puntual a comunidades en materia de monitoreo de fauna, la creación de planes de manejo y planes de vida de algunas comunidades, el ‘proceso de integración’ con los awá de Colombia y el apoyo al funcionamiento operativo de la FCAE. La dimensión operativa de la FCAE se articula directamente con sus tareas más políticas como el permanente contacto (presencia física) con sus bases en diferentes espacios.

También durante este periodo se ha presentado un conflicto importante entre algunos centros comunitarios y la Federación por la construcción de una carretera ilegal²⁷ por parte de una empresa minera. Esta carretera atraviesa el territorio awá y llega hasta el límite con Colombia en el extremo norte de Mataje (ver Mapa 1).

En un sentido general, la demanda por mejorar las condiciones de salud, educación y movilidad en el territorio se mantiene²⁸. Es posible en-

25 Esta información también se recogió en reuniones con las autoridades comunitarias y en el taller de manejo forestal que realizamos en Balsareño en compañía del técnico forestal de la FCAE.

26 Entrevistas a Mónica Suquilanda-USAID; Andrew Noss-WCS; Jaime Levy-Altrópico.

27 El MAE después de una visita y reunión con la FCAE consideró que esta carretera construida por la minera era ilegal.

28 Jornada de cartografía social, Guadualito; reunión comunitaria en Palmira y la Unión.

contrar una relación entre estas demandas no atendidas y los actuales conflictos territoriales.

La participación como un factor clave en la gobernanza territorial awá

Actualmente, el proceso organizativo comandado por la federación posee una solidez que ha venido adquiriendo desde hace casi treinta años. No obstante, hay varios aspectos que es necesario identificar, sobre todo en relación con los actuales conflictos territoriales. Esta situación refiere la atención en la acción de la federación, en su legitimidad y en la relación con las comunidades que representa; así como con la cooperación internacional.

La constatación de la ausencia estatal en el territorio awá se relaciona con las amenazas de mineros, madereros y palmicultores (respecto a las amenazas cf. Naizot y Pineda, 2011). Ante esta ausencia estatal, la acción de la FCAE toma generalmente la forma del órgano encargado de la administración territorial. En este sentido, en algunas situaciones y sólo por cuestiones operativas y sin desconocer la existencia del Gobierno nacional, se hace referencia a la FCAE como el “gobierno” awá.

Por su parte, la relación con gobiernos locales es muy reciente y en torno a aspectos puntuales. Ahora la población awá es vista como un potencial electoral, siendo este uno de los principales vínculos²⁹.

Contrarrestando estas amenazas, la FCAE procura generar un proceso organizativo que se articule en torno a consensos amplios para el manejo de los recursos naturales y el enfrentamiento de dichos conflictos. Las asambleas y los consejos de Gobierno Ampliado (CGA)³⁰ aparecen, entonces, como el principal canal de participación de las bases y deben ser analizados con más detalle.

29 Reunión comunitaria en Palmira; jornada de cartografía social, Guadualito, Esmeraldas.

30 El CGA es un espacio institucionalizado en marzo de 2009. En él participan tanto el Consejo de Gobierno de la Federación de Centros Awá del Ecuador y su equipo técnico, así como cada uno de los presidentes de las 22 comunidades. Se reúnen cada dos meses o antes si la situación lo amerita para tomar decisiones importantes en el proceso organizativo. Si el tema no es resuelto en esta instancia se lleva a la asamblea. El primer Consejo de Gobierno Ampliado fue realizado en Lita. En este espacio se dirimió la pertinencia y la posibilidad de realizar la presente investigación.

La dinámica participativa

La participación como eje de análisis es una herramienta útil para indagar aspectos centrales como la legitimidad, la justicia y la eficacia en la implementación de las directrices y decisiones. No obstante, la construcción del sistema territorial de gobernanza es compleja y no queda cabalmente explicado por la dinámica participativa. Aún así, sí es una herramienta que ayuda a entender esta complejidad y a estructurar una análisis aprehensible y esclarecedor. Esta esquematización tiene tanto un poder analítico sustancial como sus riesgos reduccionistas. Ante esto es importante referirse permanentemente a los hallazgos de campo y mantener una postura crítica y atenta.

El análisis aquí presentado aborda patrones ya consolidados en los varios años del proceso, los cuales se conjugan con las circunstancias actuales y las prácticas participativas de hoy.

La participación en asambleas es un proceso complejo y de un carácter inminentemente político. Sin embargo, la motivación para la asistencia a dichos espacios, no es solamente político. En la asamblea se propicia el encuentro entre comunidades y personas³¹, y se generan alianzas, acuerdos y negocios personales. También es un espacio de celebración y festejo; en este sentido, evidentemente la asistencia y la participación en la asamblea puede estar motivada por intereses no solamente “políticos”, sino también de otras índoles “socioculturales”.

La asamblea y la dinámica participativa puede ser analizada, tomando la propuesta de Fung (2006) mencionada anteriormente³². La evaluación de la participación en las asambleas indica que, si bien la convocatoria es

31 Es importante recordar que la movilidad en el territorio acá siempre será un factor limitante. Muchas de las comunidades están separadas por días de camino, y el intercambio sociocultural entre comunidades alejadas no siempre es fácil.

32 La amplitud de la convocatoria determina que tan legítimas son las decisiones de la asamblea. El tipo de comunicación que se establece, si es en dos vías en un marco de mutua receptividad, o sólo de la FCAE hacia las bases determina aspectos de la “justicia” de las decisiones que la asamblea tome. El impacto que tienen las diferentes participaciones en la toma efectiva de decisiones configuran la eficiencia con la que las decisiones son implementadas, pues dinámicas de incidencia directa permite contar con el apoyo comunitario en la aplicación de las decisiones (cf. Fung, 2006: 66).

abierta para todos los interesados, la participación suele quedar en boca de unos pocos quienes participan reiteradamente; estos generalmente son los líderes comunitarios. Adicionalmente, son también pocos los temas que motivan a una participación intensa. El contraste entre los temas que motivan a la participación de las bases y los temas que la FCAE propone como relevantes, es de particular importancia pues permite medir “la distancia” entre las visiones de unos y otros.

En este sentido, resulta interesante constatar que muchos de los temas de la asamblea que para la FCAE son cruciales, para las comunidades no lo son. Resalta por ejemplo que el informe de gestión de la FCAE que incluye los avances de los proyectos y la distribución de los gastos, fue un tema que no despertó mayor interés en las comunidades. El tema de los futuros proyectos³³ no alcanzó a ser abordado en la última asamblea pues se dio prioridad a otros aspectos de carácter más internos³⁴.

Por otro lado, los temas y problemas al interior de las comunidades como conflictos entre personas y/o familias, problemas de linderos de predios familiares, etc. motivan la participación activa. Otro tema, de naturaleza diferente, pero que motivó intensamente la participación fue la disputa por el poder, es decir, la disputa por la dirección de la Federación. En este sentido, las alianzas entre comunidades, personas e instituciones awá (la DEIBNAE), mostró un refinamiento en sus estrategias políticas de oposición y asedios al poder que sugieren que muchas de las movilizaciones de intereses, posturas y configuración de posiciones en las comunidades awá ocurren de forma tácita y aparte de las dinámicas y acciones de la FCAE y los proyectos que implementa.

Es fundamental reconocer que la participación en la asamblea está matizada por otros aspectos importantes pero que no son explícitamente de naturaleza ‘política’ como, por ejemplo, el idioma. La mayoría de personas que asisten a la asamblea tienen como lengua materna el *awapit* y pueden

33 Con excepción del proyecto de Sociobosque que fue abordado tempranamente en la asamblea.

34 Estas apreciaciones están basadas en la asamblea que tuvo lugar en el centro comunitario de Pailón (Carchi), desde el 6 al 8 de Julio de 2009. Muchos de los patrones de participación aquí descritos han sido evidenciados también en otros espacios participativos como los CGA e incluso reuniones comunitarias y talleres a los cuales asistí en varias ocasiones.

encontrar dificultades para comunicarse en español. Si bien, en algunos momentos se interviene en *awapit*, la mayoría de la asamblea transcurre en español³⁵. Otro factor que influye es el nivel de escolaridad de la población awá, que es particularmente bajo; la forma de conducción de la asamblea por parte de la Federación, no logra ser lo suficientemente ‘didáctica’ para permitir una comprensión y una participación eficaz por parte de las bases. Finalmente, las asambleas cada seis meses es un lapso de tiempo largo³⁶ en un contexto de permanente conflictividad y de intensa actividad de proyectos y relación con ONG. La dinámica de ejecución de los proyectos, su administración e implementación de actividades poseen un ritmo intrínseco que debe también ser articulado y responder a exigencias de donantes y cooperantes. Dicha dinámica está permanentemente exigiendo la toma de decisiones las cuales quedan principalmente a cargo de la FCAE. Se debe reconocer que las asambleas tienen un costo elevado en términos económicos y de movilización de las comunidades. Esto evidencia la necesidad de otros espacios de participación que apoyen la comunicación con las bases como los CGA.

El propósito de la asamblea es dinamizar abiertamente la participación comunitaria para la toma de decisiones en un marco de “cogobierno” entre la FCAE y las bases. Consecuentemente, también es un espacio en el que la FCAE ‘rinde cuentas’ a sus bases comunitarias. En este sentido, la generación de consensos y de compromisos efectivos sería una forma de evaluar el “poder” que tiene la asamblea y la FCAE. Estos compromisos abarcan tanto el empeño por llevar a cabo los proyectos que se implementan, así como también comprometerse con el proyecto de la FCAE de llevar adelante un proceso organizativo que redunde en la protección y desarrollo sostenible del territorio y el pueblo awá.

Existen algunas situaciones, especialmente en relación con los conflictos y también con la implementación de algunos proyectos, que indican que la asamblea no siempre logra generar compromisos efectivos por parte de las comunidades en torno a temas cruciales. En este sentido, la parti-

35 Observaciones consignadas en la libreta de campo.

36 A pesar de ser, entre los procesos indígenas, una de las dinámicas con mayor frecuencia de asambleas.

cipación en los términos en que se ha dado, podría no siempre redundar en eficiencia en cuanto a la institucionalización de los acuerdos, como por ejemplo, en torno a proyectos como el de manejo forestal que implicaba acuerdos respecto a los volúmenes y las áreas a extraer. Probablemente no necesariamente sea una vía para la “justicia” de las decisiones tomadas, por ejemplo, con respecto a la inversión de sumas de dinero en proyectos de conservación que no interesan a la comunidad, mientras por otro lado, éstas reclaman más apoyo en mejorar sus condiciones de vida, especialmente en educación y salud.

Respecto a la amplitud de la convocatoria, la asamblea es un espacio abierto a todos los interesados, en este sentido, las decisiones que de allí se deriven tienen el potencial de contar con plena legitimidad ante las bases. No obstante, en la realidad la participación efectiva, es decir, la intervención activa, queda en bocas de muy pocos. Respecto al tipo de comunicación que se establecen en las asambleas se constató que la FCAE es la que hace propuestas o expone los temas, ante lo cual las comunidades permanentemente hacen preguntas, y finalmente la asamblea “aprueba o no aprueba” la propuesta. Es importante resaltar que el proceso de debate para la aprobación de la propuesta es complejo y suele contar con participaciones y opiniones de los líderes comunitarios. Estas opiniones o manifestación de sus apreciaciones tienen influencias sustanciales en la decisión que finalmente tome la asamblea.

Dado que el modo de comunicación suele restringirse principalmente a un proceso de debate para la decisión de aprobar o no las propuestas de proyectos, las comunidades en la asamblea tienen principalmente un poder de veto más que de proposición o influencia en las propuestas o decisiones. En este sentido, entiendo que las participaciones individuales podrían estar motivadas por influir en la decisión de aprobación o veto, mas no estarían motivadas en influir sustancialmente en el enfoque de la FCAE, especialmente respecto a los proyectos. Por ejemplo, la elaboración conjunta de una propuesta como tal, trabajando en comités o mesas de trabajo no es una dinámica que ocurra en la asamblea. Probablemente el nivel educativo y condiciones de pobreza influyan en este sentido, pero también aspectos culturales particulares que hacen de los Awá personas introvertidas.

Ante la dificultad de lograr una incidencia en el enfoque y funcionamiento de la FCAE mediante las participaciones en la asamblea, muchas de las actividades que la FCAE implementó pudieron dejar de considerar aspectos que para las comunidades resulten centrales. En este sentido, y bajo la propuesta de Fung (2006), la “justicia” de los proyectos que durante buen tiempo del proceso organizativo impulsaron las agencias de cooperación y ONG de conservación y que fueron implementadas por FCAE puede ser cuestionada. De hecho, la tensión por el dinero que manejó la FCAE proveniente de los proyectos pero que no ha redundado en mejorar las condiciones de vida de los awá, se ha transformado en un reclamo permanente por parte de las comunidades. Al respecto, es importante anotar que las demandas y reclamos a la FCAE no suelen hacerse de forma tan directa en la asamblea y son más bien manifestados en otros espacios menos formales como talleres o entrevistas. Esto fue particularmente evidente en los diferentes espacios de esta investigación, como por ejemplo, en los grupos focales desarrollados en la comunidad de Palmira y la Unión, y en las jornadas de cartografía social en la comunidad de Guadualito.

El nivel de compromiso por parte de las comunidades de llevar a cabo las actividades que se plantean en la implementación de los proyectos es un aspecto relevante. Los tímidos resultados de muchos de los proyectos implementados se relacionan con este compromiso. Ahora bien, más que juzgar la falta de compromiso con los acuerdos ante los proyectos de la FCAE, considero más valioso indagar los motivos de la falta de éste.

La ‘orientación hacia afuera’ por parte de FCAE y el consecuente distanciamiento con las bases comunitarias, han profundizado las resistencias por parte de éstas, especialmente al momento en que la FCAE intenta regular el uso de los recursos. La inminente tensión entre ‘autonomías’ comunitarias y regulaciones centralizadas (por parte de la FCAE) es un tema que se relaciona también con la participación. Si las comunidades no encuentran una forma de ‘gobernar’ la FCAE, e influir en sus enfoques, resulta comprensible que opten por defender sus autonomías especialmente respecto al uso de los recursos. La meta gobernanza, en términos de Kooiman, indica que el gobierno de los gobernantes, obedece más bien a presiones externas, y no a la comunidad. Una desconfiguración del tercer orden

de gobernanza tiene implicaciones en el sistema general del gobernanza territorial, especialmente al nivel de la legitimidad de los gobernantes, que aparecen entonces como una dimensión por fuera del alcance inmediato de las bases a las que representan.

Los conflictos en el territorio

Actualmente el territorio awá enfrenta varios conflictos que amenazan la integridad tanto del proceso organizativo como de los ecosistemas. Estos conflictos tienen también vínculos directos con el tipo de relaciones que se establecieron con la FCAE y las comunidades y es precisamente esta relación la que más se altera en los momentos de tensión.

Recientemente se ha presentado un conflicto por el ingreso de una empresa minera, la cual ha cooptado a varias comunidades y han establecido acuerdos de apoyo para la apertura de una vía que cruza las comunidades de la Unión, Ojala y Tarabita saliendo a Tobar Donoso, en el cordón fronterizo (ver Mapa 1). Para las comunidades, la construcción de una carretera aparece como una alternativa atractiva para mejorar sus condiciones de movilidad y tener conexión con el mundo externo. Inicialmente, la minera estableció acuerdos con tres comunidades que implicaban recursos económicos, plantas eléctricas y la promesa del desarrollo y más dinero con la habilitación de la carretera (Entrevista E1).

Los acuerdos de estas comunidades con la empresa minera representó automáticamente una confrontación con la FCAE. Las mineras han sido siempre lo suficientemente hábiles para lograr romper las relaciones entre los centro comunitarios y la Federación. La estrategia usual ha sido un discurso que busca deslegitimar a la FCAE argumentando que ella no ha apoyado con dinero y aspectos materiales, cosa que la empresa siempre promete. En este sentido, la empresa logra cambiar la noción que las comunidades tienen de la FCAE, pasando a percibirla como una organización que debe estar encargada principalmente de dar a las comunidades recursos o apoyo material, dejando de lado el apoyo organizativo y la dimensión política (Entrevista E2, 2009).

Este punto es sensible, puesto que durante bastante tiempo la FCAE tuvo como principal función la implementación de proyectos de diversa índole (conservación, uso sustentable de recursos, etc.) los cuales no necesariamente tuvieron resultados contundentes para la calidad de vida de las comunidades. En este sentido, no es difícil que las empresas utilicen este argumento para deslegitimar a la FCAE y aprovechan que las comunidades permanentemente han reclamado más apoyo en mejorar sus condiciones de vida. Actualmente, los discursos de los líderes de una de las comunidades comprometidas con la empresa están fuertemente enfocados en este sentido (Reunión comunitaria, Entrevista E1, 2009, Entrevista E3, 2009).

La situación se ha agravado recientemente con la constatación de que los acuerdos establecidos en la asamblea y en los CGA no han sido cumplidos y el conflicto se ha extendido vinculando otra de las comunidades. La polarización entre una de las comunidades y la FCAE amenaza con la separación del proceso organizativo.

Ante la potencial magnitud del conflicto, y las dificultades que enfrenta la FCAE para frenarlo, es necesario revisar los procesos participativos y de toma de decisiones. Pero más que esto, también aparecen otras dimensiones que considero indispensable tomar en cuenta y que es la consecuencia de la ausencia estatal que no ha representado un “respaldo” del proceso y de la FCAE y que no ha actuado tampoco como la autoridad última del territorio.

La permanente demanda comunitaria por una mejora de las condiciones en las que viven, especialmente en materia de salud y educación es un aspecto que llega a estar fuera del alcance de la Federación y de los organismos de cooperación como USAID que han manifestado no poder apoyar, argumentando que es competencia del Estado. En este sentido, la falta de fuentes alternativas de financiación de la FCAE no coopera con la situación. La cuestión de la movilidad plantea una tensión mayor, pues si bien las comunidades se sienten marginadas, el impacto de una carretera no necesariamente les mejora las condiciones de vida, pero sí representa un deterioro ambiental enorme y una amenaza de invasión de tierras entre otros. La tensión entre desarrollo y ambiente no es para nada fácil de resolver.

La ausencia del Estado en el territorio awá llega a tener consecuencias serias en este momento. El territorio awá aún presenta índices de alfabe-

tización muy bajos, también de salud, y de pobreza en general. Estas son responsabilidades principalmente estatales y que es difícil que la FCAE pueda transformarlas. Por otro lado, dada la confrontación entre las bases y la Federación y el debilitamiento de espacios participativos para la resolución de conflictos, la ausencia estatal hace parte central del problema.

La incapacidad que ha mostrado el proceso organizativo de solucionar las precarias condiciones de vida y poder procesar los conflictos que aparecen en el territorio indica una desconfiguración del segundo orden de gobernanza planteado por Kooiman (2004).

La participación es un proceso que puede ser fortalecido al mejorar las condiciones educativas de las comunidades. En este sentido, la presencia estatal en materia de educación y salud representa también un apoyo sustancial al proceso organizativo y a la sólida construcción de un sistema de gobernanza.

Sintetizando y respondiendo a la pregunta central de este artículo, considero que los proyectos no tuvieron el éxito esperado, principalmente debido a que las dinámicas de participación no han sido lo suficientemente estructuradas para una influencia considerable en el diseño y enfoque de estos proyectos por parte de las comunidades; las comunidades tampoco pudieron influir en el enfoque de la FCAE. Las consecuencias de estas tensiones no permiten una plena legitimidad, ni una eficacia en la implementación de las decisiones y acuerdos y tampoco en una “justicia” en cuanto al enfoque de los proyectos. En este sentido, enfrentar los actuales conflictos territoriales en donde deliberadamente las empresas madereras y mineras buscan profundizar las tensiones entre las bases comunitarias y la Federación se hace difícil. Considero también que la ausencia del Estado tiene una relación importante con estos aspectos. Si bien la FCAE busca apoyar a las comunidades en mejorar sus condiciones de vida, ha encontrado dificultades en resolver la situación de educación, salud y movilidad en el territorio. Ante esta situación, las comunidades son vulnerables a las empresas que prometen transformar dichas condiciones de vida a través de la construcción de una carretera. Así mismo, la falta de financiación de la Federación le resta maniobrabilidad en la negociación, y sus proyectos han estado encaminados a otros aspectos puesto que las agencias de coo-

peración no financian proyectos directamente encaminados a educación y salud. Esta es una tarea que corresponde al Estado ecuatoriano. Las condiciones de vida de las comunidades, especialmente en educación y salud, no han permitido a que las dinámicas de participación permitan generar dinámicas de elaboración conjuntas de propuestas.

¿Nuevas dinámicas en el territorio awá?

Ante las particularidades de los espacios participativos y sus limitaciones y buscando afianzar el proceso organizativo, se ha institucionalizado el Consejo de Gobierno Ampliado (CGA) que se realiza cada dos meses. Este espacio, el cual implica una dinámica de representación política de las bases, se empieza a consolidar como una herramienta crucial para los procesos de toma de decisiones participativas y el proceso organizativo en general. El CGA aparece entonces como un espacio con gran potencial para consolidar dinámicas de participación que tengan más efecto en la consolidación del proceso organizativo. No obstante, llama la atención su tardía aparición (en marzo 27 de 2009) en este proceso awá que ya cuenta con casi treinta años. En este sentido, los recientes apoyos de la cooperación enfocados en viabilizar estos espacios sugieren un giro en el enfoque, orientándose más en fortalecer el proceso político-organizativo, el cual serviría también de base para los procesos de administración responsable de los recursos naturales.

La consolidación de un sistema de gobernanza territorial es un proceso principalmente político, que si bien esta respaldado por un proceso de gestión de proyectos, considero delicado que estos se conviertan en la principal motivación y propulsión del proceso y el principal vínculo político entre los dirigentes de la organización y su población.

Al respecto es necesario prever que las definiciones de gobernanza por parte de entidades como USAID, el Banco Mundial, etc. reflejan una confusión del concepto con la noción de gestión. Las nociones de ‘buena gobernanza’ son particularmente cercanas a esta confusión. En un contexto similar, la dinámica de participación es vaciada de contenido político y no

aporta a las dimensiones verdaderamente políticas como las propuestas por Fung (2006).

Ahora bien, estoy de acuerdo con Abramovay *et al.*, (s/f) al considerar que los procesos organizativos indígenas requieren de la articulación con el mundo moderno. En especial el apoyo económico ya que las organizaciones indígenas no cuentan con el respaldo estatal en este sentido, y sin el cual simplemente no son viables. En este sentido la articulación con la cooperación internacional, representan, entre otros, este apoyo económico.

En los últimos años, se han empezado a diversificar las fuentes de financiación de proyectos³⁷ lo cual representaba una debilidad sustancial. La realización de proyectos con el Estado³⁸ enfocados a mejorar las dinámicas productivas apuntan en esta dirección. Respecto a las relaciones con el Estado, aunque se han iniciado, se han dado más desde las comunidades directamente con algunos gobiernos locales (Alcaldía de San Lorenzo) y en torno a apoyos muy puntuales. En este sentido considero que la FCAE puede mediar y apoyar más, o incluso exigir una presencia del Estado más permanente.

Las reflexiones sobre el enfoque y propósito de la FCAE se han generado también internamente. Se ha manifestado que el proceso organizativo debe ser el centro del accionar de la FCAE, ante lo cual el rol de la cooperación debe ser más bien de sinergia y apoyo a procesos motivados endógenamente (Entrevista E2, 2009). Al respecto y aprovechando la prioridad que para el último proyecto implementado por WCS ha tenido el proceso organizativo, se busca fortalecerlo aún más y estrechar la relación con las bases. El presidente de la FCAE identifica también la necesidad de priorizar el proceso organizativo y fortalecer la relación con las bases el cual será uno de los ejes fundamentales de la siguiente fase del proyecto de WCS³⁹.

El fortalecimiento de la relación con las bases y la configuración de un proceso organizativo sólido y cohesionado es un aspecto que depende fuertemente de los tipos de participación que se establezcan. En este

37 USAID ha representado la fuente principal de apoyo económico de la FCAE durante la última década.

38 Proyecto MIES-Carchi y MIES-Esmeraldas.

39 Entrevista a Olindo Nastacuáz.

sentido considero que el CGA debe jugar un papel preponderante que complemente las asambleas, donde si bien la convocatoria es para los dirigentes de las comunidades y la FCAE, los tipos de comunicación pueden estar encaminados a configurar una visión en conjunto del proceso y los proyectos a implementar.

Ahora bien, si hemos enfatizado que la ausencia del Estado ha tenido consecuencias negativas en la construcción del sistema de gobernanza en el territorio acá, la exigencia de su presencia debe ser un punto importante en la agenda de la Federación y un punto que deberían apoyar los organismos de cooperación. Considero también que es apropiado que esta exigencia esté acompañada de propuestas concretas ante los problemas del territorio. El proceso de elaboración de estas propuestas, en conjunto con las bases comunitarias, puede ser apoyado por las agencias de cooperación, creando sinergias importantes en la consolidación del territorio.

Conclusiones

La FCAE juega un papel complejo que le implica atender tanto las exigencias comunitarias como los requerimientos de la cooperación. Durante la historia del proceso no siempre se ha logrado responder cabalmente a ambos ámbitos. En este sentido, a pesar de que los espacios de participación han existido desde el principio, la dinámica de la participación no siempre ha logrado influir en un modo tal que los proyectos estén enfocados a resolver las necesidades de las comunidades.

Dado que la dinámica de participación en la asamblea no está orientada a generar visiones o propuestas conjuntamente con las comunidades, el poder comunitario suele quedar restringido al poder del veto, mas no de diseño de propuestas. En este sentido, la historia del proceso ha mostrado que los proyectos implementados no siempre han sido “justos”⁴⁰ en el sentido que no han considerado aspectos centrales para las comunidades. La reserva de la vida ilustra este punto.

40 En términos de Fung (2006).

Las deficiencias en el cumplimiento de los compromisos por parte de las comunidades en el marco de proyectos, revelan también que estos proyectos no representan aspectos centrales para las comunidades o no han tenido en cuenta aspectos importantes.

Los conflictos actuales revelan la fragilidad del vínculo entre los procesos comunitarios y la Federación. Si bien esta fragilidad ha sido incrementada por las empresas mineras, éstas aprovechan puntos ya debilitados de la relación.

En un sentido general, el posicionamiento de los proyectos como el principal medio de interacción entre las bases comunitarias y la Federación, descuidando el proceso organizativo como tal, debilita el sistema de gobernanza territorial awá. Lograr un equilibrio en las relaciones políticas entre las bases comunitarias, las instituciones representativas y los organismos de cooperación y conservación requiere de la presencia de un Estado garante de los derechos, y responsable de sus obligaciones que actúe como respaldo del proceso organizativo del pueblo awá.

La ausencia estatal ha ayudado a debilitar el proceso organizativo awá. En especial, las precarias condiciones de vida de las comunidades hacen que estas sean vulnerables a penetraciones extractivistas como mineros y madereros. Por otro lado, las deficiencias en la educación hacen que las dinámicas de participación no logren estructurarse de tal forma que las comunidades puedan ser propositivas y exigentes frente a las acciones de la FCAE.

Finalmente, espacios dinámicos y flexibles de participación como los Consejos de Gobierno ampliado representan un aspecto central del proceso organizativo. Este CGA puede complementar la dinámica participativa de la asamblea y potenciarla enormemente de tal modo que se consoliden dinámicas legítimas, justas y eficaces de administración territorial.

El apoyo al proceso organizativo y al fortalecimiento de las relaciones entre las bases comunitarias y la Federación, es un aspecto en el cual la cooperación ha venido priorizando recientemente. Por otro lado, la exigencia de la presencia de un Estado de derecho en el territorio awá es una tarea central de la FCAE y donde el apoyo de la cooperación es importante.

Bibliografía

- Abramovay, Ricardo; José Bengoa, Julio Berdegué, Javier Escobal, Claudia Ranaboldo, Helle Munk Ravnborg, Alexander Schejtman (s/f). “Movimientos sociales, gobernanza ambiental y desarrollo territorial”. Programa Colaborativo de Investigación sobre Movimientos Sociales, Gobernanza Ambiental y Desarrollo Territorial Rural. Disponible en: http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.rimisp.org%2Fproyectos%2Fcodigo.php%3Fdocumento%3Dsintesis.pdf&ei=MfxZUKaLGo_Y9ASyw4HgAw&usg=AFQjCNF2mXdoMP8GU03TaYxs_7o6cdv_Mg&sig2=y7rmRq5vOF8JSdCDOBvVrg&cad=rja (visitada el 19 de octubre de 2012).
- Ansaldi, Waldo (1991). *Gobernabilidad y seguridad democrática*. Santiago: Comisión Sudamericana de Paz.
- Camou, Antonio (2001). “Estudio preliminar”. En *Los desafíos de la gobernabilidad*, A. Camou (Ed.). México: FLACSO, IISUNAM.
- Cisneros, Paul (2010). “La construcción de sustentabilidad ambiental como un tema de gobernanza”. En *Ciencia, política y poder. Debates contemporáneos desde Ecuador*, Mónica Mancero y Rafael Polo (Comp.): 335-364. Quito: FLACSO, CONSEUP.
- Comisión de las Comunidades Europeas (2001). “La gobernanza Europea, un libro blanco”. Bruselas. Mimeo.
- Coppedge, Michael (2001). “Instituciones y gobernabilidad en América Latina”. En *Los desafíos de la gobernabilidad*, Antonio Camou (Ed.): 211-239. México DF: FLACSO, IISUNAM.
- Crozier, M., S. Huntington y J. Watanuki (1975). *The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission*. New York: New York University Press.
- Cuasaluzán, Hermes y Jaime Levy (s/f). *Experiencias de la Federación Awá del Ecuador en el manejo y conservación de su territorio*. Montevideo: WRM-Movimiento mundial por los bosques tropicales. <http://www.wrm.org.uy/inicio.html>.
- FCAE (Federación de Centros Awá del Ecuador) (<http://www.federacionawa.org/>).

- Elisfisch, Ángel (1989). “Gobernabilidad y consolidación democrática”. *Revista Mexicana de Sociología* 89 (3): 113-132.
- Fontaine, Guillaume (2004). “Introducción. Petróleo y desarrollo sostenible en la Amazonía: apuestas para la gobernabilidad democrática. En *Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador. 2. Las apuestas*, Guillaume Fontaine (Ed.). Quito: FLACSO.
- (2011). “Prólogo”. En *Gobernanza, participación y territorio. El pueblo Awá del Ecuador y su proceso organizativo*, Juan Pineda Medina. Quito: FLACSO, Abya Yala.
- Fontaine, Guillaume y Susan Velasco (2011). “La conceptualización de la gobernanza: de lo descriptivo a lo analítico.” En *Gobernanza ambiental en Perú y Bolivia. Tres dimensiones de gobernanza: recursos naturales, conservación en áreas protegidas y comunidades indígenas*, Karen Andrade (Coord.): 25-39. Quito: FLACSO, UICN.
- Fung, Archon (2006). “Varieties of Participation in Complex Governance”. *Public Administration Review* 66: 66-75. December.
- Kaufmann, D., A. Kraay y M. Mastruzzi (2006). “Governance matters V: Aggregate and individuals governance indicators for 1996-2005”. Washington D.C: World Bank Policy Research, Working Paper 4012, World Bank.
- Kooiman, Jan (2004). “Gobernar en gobernanza”. En *Instituciones y Desarrollo* 16: 171-194. Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya. Disponible en: http://www.ruralfinance.org/servlet/BinaryDownloadServlet?filename=1113592922837_Governance.pdf (visitada octubre de 2009).
- Lehm, Zulema (1994). “The Creation of the Awá Indian Territory. En *The Role of Alternative Conflict Management in Community Forestry*, Christine Pendzich, Garry Thomas and Tim Wohigent. Roma: FAO. <http://www.fao.org/docrep/005/x2102e/X2102E00.HTM>
- Naizot, Anne-Lise y Juan Pineda (2011). “Estudio de impacto social de las amenazas territoriales en los centros Guadualito y Balsareño, territorio awá”. En *Gobernanza, participación y territorio. El pueblo Awá del Ecuador y su proceso organizativo*, Juan Pineda: 152-259. Quito: FLACSO, Abya Yala.

- USAID (2006). Resumen CAIMÁN Project. Quito: USAID http://www.usaid.gov/policy/budget/cbj2006/lac/pdf/ec_complete05.pdf
- Solá, Amadeo (2000). “La traducción de governance”. *Punto y Coma* 65. Disponible en: <http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/65/pyc652.htm> (visitada 14 de septiembre de 2011).
- Sosa, Beatriz (2000) *Gobernanza: la comprensión y la expresión*. *Punto y Coma* 66. Bruselas. Disponible en: <http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/66/pyc667.htm> (visitada el 14 de septiembre de 2011).

Entrevistas

- Entrevista E1 (2009). Líder comunitario de la Unión.
- Entrevista E2 (2009). Líder de la comunidad de Guadualito
- Entrevista E3 (2009). Mujer de la comunidad de la Unión.